

LA DICTADURA Y EL FIN DE LA MONARQUÍA (I)

1. EL GOLPE DE ESTADO

Desde 1923 se rumoreaba la situación de golpe de Estado y eran distintas personas las que abogaban en su favor: El Debate pedía la Dictadura con preferencia por el Conde de Romanones, mientras que un candidato era también el general Weyler. El general Aguilera casi preparó la conspiración con sentido izquierdista, con el apoyo de los intelectuales como Unamuno. El rey pudo tener la tentación de una solución autoritaria temporal pero no era un monarca dictatorial y durante el verano de 1923 pensó en una especie de Gobierno militar del Ejército, para luego poder volver a la situación constitucional.

Hay que destacar la situación peculiar de Barcelona. Mientras la situación de Marruecos creaba agitación entre los militares, el ambiente ciudadano participaba de un creciente antiparlamentarismo. El movimiento catalanista se había radicalizado sobre todo la juventud con la aparición de Acció Catalana. Más grave era la situación del orden público; un desorden que no se acababa, con varios atentados y una huelga de transporte en la ciudad, siendo lo más grave la falta de reacción del Gobierno. La Lliga, desesperada, trató de buscar una fórmula que representara un Estado con pretensión de serlo. Primo de Rivera fue hábil al no mostrarse opuesto al catalanismo y fue lo que sirvió.

El Gobierno demostraba con las elecciones que no pretendía modificar el comportamiento del poder público en un régimen de liberalismo oligárquico, y que sus objetivos de reforma en el terreno constitucional o en las relaciones Iglesia-Estado, eran revocados inmediatamente después de ser enunciados. En las últimas semanas del Gobierno liberal se veía una gran división del gabinete sobre uno de los problemas más agudos que tenía España, el de Marruecos. Cada persona de la clase dirigente liberal parecía sólo interesada por obtener los mejores resultados para sí misma. Cuando se produjo el golpe, sólo 2 ó 3 ministros trataron de resistirse.

La conspiración se preparó en Madrid en junio de 1923 cuando el general Primo de Rivera vino a Madrid-llamado por el Gobierno y estableció contacto con un grupo de generales de los que la figura más representativa era Cavalcanti. El propio Ejército estaba muy dividido, hasta el punto de que sólo el repudio a la clase política de la Restauración permitió su unidad. El golpe no sería militarista, en el sentido que el Ejército ocupara el poder de forma definitiva, sino que sería entregado a elecciones civiles a políticos.

Primo de Rivera presentó su programa en un manifiesto un poco vacío en cuanto a soluciones concretas, pero que concordaba con el espíritu regeneracionista del momento. La razón principal de la victoria del golpe del 14 de septiembre fue que no sólo en el Ejército, sino en la Sociedad española, nadie estaba dispuesto a luchar por el gobierno. El rey además, no estaba tampoco muy de acuerdo con la Concentración Liberal y consideraba, como muchos políticos, inevitable un régimen autoritario militar; pero él no estimuló ni ayudó al golpe. Los conspiradores nunca contaron con su apoyo una vez que llegó a Madrid, no hizo más que reconocer al vencedor.

Dice Carlos Seco que Alfonso XIII no confundió el patriotismo con la Constitución de 1876; sabía que el sistema político era más ficticio que real. En principio mantuvo una apariencia de legalidad, haciendo que Primo de R. que llegaba de Barcelona dispuesto a formar un Directorio militar bajo su presidencia, aceptara jurar como ministro único, guardando apariencias de constitucionalidad. El propio general reconoció que el Rey fue el primer sorprendido por el golpe. El duque de Maura fue uno de los que se opusieron al nuevo régimen pero admite que tuvo "una fuerza de opinión como rara vez la gozó gobierno alguno en España".

En la prensa de los días posteriores al golpe se percibe la sensación de popularidad de Primo; sólo la republicana mostró reticencias, aunque parciales; los socialistas tuvieron gran cuidado en aparecer como expectantes sin apoyar a la clase política desplazada. Sólo Unamuno, Pérez de Ayala y Azaña, entre los intelectuales estuvieron en contra del Dictador, pero el último reconoció que su llegada había sido bien recibida porque el país estaba presidido por la impotencia y la imbecilidad. En estas condiciones, cabe pensar que si Alfonso XIII se hubiese opuesto al golpe, hubiera peligrado su trono.

2. EL DICTADOR REGENERACIONISTA

Para entender la regeneración que propuso y los rasgos de su Dictadura, hay que ver su personalidad. En realidad, el general que se había alzado contra el sistema de la Restauración, estaba muy integrado en ella. Su familia y su título procedían del mundo liberal. No carecía de virtudes militares: combatiente valeroso en Cuba, Filipinas y Marruecos. Fue general a los 41 años. La crisis del sistema de la Restauración le lanzó a la vida pública. Desde 1919 su preocupación por el Orden Público le hizo reclamar medidas expeditivas, extralegales. La regeneración que predicó no era ajena al sistema de la Restauración, sino tan identificada con él y con la sociedad del tiempo, que todos, políticos e intelectuales, o incluso los mismos conspiradores militares, la practicaban.

La dictadura era simple y sus características podía favorecer que conectara con las masas populares. Jesús Pabón comparó a Primo de Rivera con otros gobernantes peninsulares: tenía la simpatía de Serrano, la impetuosidad de Narváez, pero era menos explosivo y como el dictador portugués Sidonio País, confiaba plenamente en el apoyo popular y mostraba idéntica perplejidad respecto a los problemas fundamentales. Se caracterizó por poseer una cultura liberal. Decía Pemán que sus propósitos no eran políticos, pero que él venía a hacer una política verdadera.

El regeneracionismo y las características personales de Primo explican su régimen dictatorial. Se dijo que su dictadura era igual que la fascista de Mussolini. Pero no era así; él era un admirador personal del Duce, pero sólo eso. Había diferencias y sólo la consolidación del régimen y las dificultades que surgieron, le aproximaron algo a él, pero siempre con timidez e indecisión. Creó el mito del Nuevo Estado, con una "nueva derecha" antidemocrática que sirvió de modelo después al franquismo.

Se puede asemejar la dictadura de Primo de Rivera a los regímenes autoritarios balcánicos de los años 20, alejados del fascismo.

Los españoles de 1923 criticaban el liberalismo de la Restauración, sin que el liberalismo en abstracto mereciera el mismo juicio. La Dictadura se concibió siempre como un régimen temporal. Primo rechazó para su régimen un carácter dictatorial, pues no había existido nunca un

poder personal. Su bondad natural y su carácter le abocaban a un paternalismo que a veces tenía manifestaciones pintorescas. A pesar de ser dictador, no rehuía el contacto con las masas populares; podía no ser demócrata, pero se afirmaba demófilo.

Su bagaje mental era popular, pero endeble. Sus partidarios elaboraban una verdadera doctrina del “intuicionismo” para explicar las decisiones gubernamentales un patriota entusiasta, aunque sin programa, podía ser más beneficioso al país que la corrupta clase política.

3. LA REFORMA POLÍTICA

La regeneración política era una de las cuestiones primeras para Primo de R. y en sus primeros meses en el poder se dedicó casi íntegramente a ella, con la persecución contra el caciquismo. Para acabar con el sistema oligárquico caciquil podían hacerse dos cosas: intervención gubernamental en el ámbito local o la legislación de carácter nacional que hiciera desaparecer sus lacras. Ambas fueron empleadas por el dictador. El 2º método de actuación demuestra que sus intenciones eran liberales. Pensó seriamente en la posibilidad de una reforma electoral que, de haberse llevado a cabo, habría sido el establecimiento de un sistema de representación, que ya en épocas anteriores había sido solicitado por los católicos y los socialistas.

Debió pensar también en la posibilidad de reformar el Senado. Los dos proyectos no pasaron de tales, pero sí se llegó a cumplir otra parte esencial del programa del regeneracionismo político: la elaboración de un Estatuto Municipal en un sentido autonomista y descentralizador. Calvo Sotelo, que fue su promotor como director general de Admón. Local, convenció a Primo de las ventajas de los proyectos de Maura y Canalejas. En realidad, el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo era de carácter más democrático y autonomista que cualquier proyecto anterior. Cuando se debatió el proyecto en el Consejo de Ministros, surgieron oposiciones a algunos de sus aspectos más liberales como el voto femenino o la elección de los alcaldes. Por fin se aprobó, pero no se aplicó en lo que tenía de más esencial. Durante siglos el Estado había intervenido en el medio rural nombrando a los alcaldes y ahora no se cambió el sistema siendo elegidos todos por el Mº de la Gobernación. Así el propósito regeneracionista no se cumplía.

Todos los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales fueron disueltos y sustituidos por los vocales asociados y los gobernadores civiles (que ahora eran militares) empezaron una labor de investigación en los pequeños municipios, lo que parecía una auténtica persecución. Prácticamente en todos los municipios se descubrieron casos de inmoralidad (incluido en el de Madrid). Después la labor inspectora de los Ayuntamientos se encargó a unos delegados del Gobierno en cada partido judicial. En esencia se trataba de que éstos hicieran, a nivel más reducido, lo que Primo hacía para toda España. Los militares que ahora eran utilizados como medio de dominación política, tenían los mismos defectos que los demás españoles y se dieron casos de corrupción o de conversión de los delegados en sustitutos de los caciques.

Los delegados encontraban a veces impedimentos entre las autoridades judiciales y locales y esto tuvo como consecuencia el enfrentamiento de Primo con la totalidad del Poder Judicial. Es cierto que en muchas ocasiones los jueces municipales eran unos caciques, pero también los colaboradores de Primo a través del Consejo Judicial y la Junta inspectora y organizadora del Poder Judicial, era marcadamente partidista. Pero sólo después de 1928, cuando la Dictadura estaba en descenso de popularidad, el enfrentamiento se hizo más grave. Primo

suspendió las disposiciones vigentes de traslados del personal judicial y creó un juzgado especial para seguir los delitos de conspiración.

4. LA UNIÓN PATRIÓTICA Y LOS COLABORADORES DE LA DICTADURA

La labor del "cirujano de hierro" debía tener como objetivo fundamental la promoción de una política nueva. La persecución del caciquismo sólo duró unos meses.

La Unión Patriótica surgió espontáneamente en los círculos del catolicismo político que veían en la desaparición del caciquismo parlamentario una ocasión para llevar a cabo su versión de la regeneración. Los puntos de mayor implantación de la Unión P. coincidieron con zonas de influencia de los seguidores de Ángel Herrera en el medio urbano. Primo decidió oficializar en abril de 1924 la Unión P. convirtiéndola en una organización de apoyo a su régimen de la que estaba encargado uno de los generales del Directorio militar y que era promovida y controlada por los Gobierno civiles. Osciló entre un movimiento de apoyo a la Dictadura, sin significación política, hasta un partido único. El mismo documento por el que Primo inició esa oficialización era un perfecto ejemplo de imprecisión. El mismo dijo que era "eminentemente un partido político, pero en el fondo apolítico, en el sentido corriente de la palabra". El Dictador se servía de ella, pero le atribuía funciones cambiantes y también lo eran el interés y la dedicación que ponía en ella.

Aunque en su comienzo pareció tener un gran interés por ella (en 1924), luego la olvidó. En teoría, el Gobierno de 1925 era la Unión Patriótica, pero en realidad, ningún cambio fundamental se produjo en ella: siguió siendo utilizada como medio para demostrar periódicamente el fervor popular que alcanzaba Primo. Sólo al final de su régimen, cuando aumentaban las dificultades, pareció preferir la fórmula del partido oficial, aunque siempre con dudas. En 1927 decidió que la mayoría de los componentes de Ayuntamientos y Diputaciones, fueran miembros de la Unión P.

Llegó a definirla como un partido central, monárquico, templado y serenamente democrático, pero también. Le atribuyó un lema: 'Patria, Religión y Monarquía' que era demasiado semejante al Carlismo y parecía disminuir los principios monárquicos al enunciarlo en 3er lugar. La misma incertidumbre se apreció respecto de la Constitución de 1876. En un momento, el Dictador dijo aceptar en la Unión P. a todos aquellos que suscribieran la Constitución de 1876, pero él mismo la había violado y además pretendió sustituirla por una fórmula más autoritaria elaborada al margen de toda consulta popular auténtica.

La realidad de la Unión P. no se pareció a un partido único fascista, sino una entidad circunstancial y oportunista destinada a desvanecerse cuando no tuviera apoyo gubernamental. En la práctica fue un partido personalista como el que más, que sólo actuaba por decisión superior. Su supuesto regeneracionismo acabó en poco tiempo en la aceptación en sus filas de muchos antiguos caciques o la creación de nuevos cacicazgos. Además estaba compuesta por elementos de procedencia heterogénea.

Lo mismo se puede decir del Somatén, organización de apoyo al orden público, surgida en Cataluña y nutrida de las filas de la burguesía, que Primo extendió a toda España.

5. LA DICTADURA Y LOS NACIONALISMOS

La postura de Primo respecto de los nacionalismos, no se puede entender sin la referencia a su programa regeneracionista. En realidad había un importante punto de contacto entre los movimientos de tipo nacionalista y la Dictadura que derivaba de un común regeneracionismo. Barcelona fue donde se incubó el golpe de Estado. Pero la coincidencia entre algunos de los dirigentes de la Lliga Regionalista y Primo, fue breve. El Presidente de la Mancomunidad, Puig i Cadafalch, manifestó su acuerdo con el golpe. Cambó recomendó guardar reserva y atención. En realidad, con el viaje de Barcelona a Madrid, Primo hizo desaparecer sus posibles puntos de concordancia con el catalanismo. En fecha temprana se prohibió la utilización del catalán en actos oficiales, mientras eran sancionadas algunas publicaciones vinculadas al catalanismo juvenil y radical.

Hubo quien criticó a Primo por cambiar sus puntos de vista en año y medio y él mismo dijo que lo hizo sólo en unos días. Así se demuestra que la reunión de enero de 1924 en Barcelona en la que intentó conseguir la colaboración de sectores diferentes, desde la Federación Monárquica Autonomista hasta la Lliga, que la respuesta de los reunidos fue mayoritariamente negativa. Sólo logró el apoyo del sector más claramente españolista de la política catalana: la Unión Monárquica Nacional. Al principio pareció que estaba dispuesto a tolerar la existencia de la Mancomunidad, pero en manos de sus seguidores. ALFONSO SALA fue nombrado presidente de la misma, pero pronto se enfrentó con las autoridades militares del régimen en Cataluña. La ruptura inevitable se produjo cuando fue aprobado el Estatuto Provincial y en marzo de 1925 dimitió Sala. Las declaraciones que hizo Primo al respecto fueron aumentando en virulencia; llegó a decir que el autonomismo era una extravagancia y una cursilería, que desaparecería con sólo 1/4 de siglo de silencio. El catalanismo no podía ser político, sino debía ser sólo utilizado en el hogar.

En consecuencia, a partir de 1925 se fue produciendo una creciente separación entre la vida política oficial y la sociedad catalana. Los conflictos menudearon y el comportamiento del régimen, aunque no llegó a ser cruel, resultó ofensivo y carente de cualquier requisito legal. En 1926 Primo prohibió cualquier intento del catalanismo político de hacer propaganda. Si los miembros de la Lliga eran adversarios de la Dictadura, más lo fueron los jóvenes representantes de un catalanismo radicalizado, miembros de Acció Catalana, que presentaron el pleito catalán ante la Sociedad de Naciones. Más decisiva que este enfrentamiento político fue la agresión dictatorial contra la lengua y las instituciones sociales catalanas.

Primo trató de suprimir el catalán de la predicación religiosa e intervino el Vaticano; y se enfrentó con instituciones como el Colegio de Abogados de Barcelona por utilizarlo; así, contra las escuelas profesionales creadas por la Mancomunidad y respetadas internacionalmente. El catalanismo se refugió en las manifestaciones culturales, mientras se incubaban graves presagios políticos.

Las consecuencias más graves de esa política se produjeron más adelante, en el terreno político. El catalanismo representado por Cambó fue desplazado por Maciá y la importancia de éste fue porque la Dictadura le convirtió en un símbolo de resistencia nacional; colaboró con anarquistas y comunistas, dirigió una conspiración armada y redactó una constitución catalana, con el apoyo de los emigrantes en La Habana. Maciá fue no sólo un político catalán, sino el símbolo principal de Cataluña.

En el resto de las regiones de acentuado sentimiento regionalista, el impacto de la Dictadura fue semejante.

6. LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE MARRUECOS

Hasta finales de 1925, Marruecos fue el centro de las preocupaciones de Primo de Rivera y se atribuía la responsabilidad personal de la acción allí. En este caso rectificó ampliamente lo que había opinado hasta su llegada al poder. Siempre se había declarado abandonista y con motivos sólidos. Era consciente de la impopularidad de la empresa marroquí en las clases populares y también de la escasa capacidad técnica del Ejército español.

No obstante, la cuestión tenía para el Dictador una importancia personal, ya que su hermano murió en el desastre de Annual. Su política consistió en tratar de librarse del problema marroquí; intentó convencer a Gran Bretaña de que le interesaba cambiar Gibraltar por Ceuta y buscó negociar con Abd el Krim, estando dispuesto a concederle la autonomía y unas fuerzas militares propias, lo que no hubiera aceptado el sector africanista del Ejército. Nada consiguió con esos procedimientos. Las circunstancias fueron las que hicieron cambiar a Primo su política. En la zona Oeste del Protectorado estaban las líneas indefinidas, lo cual era peligroso sobre todo después de que Annual hizo tomar confianza a los rifeños. Primo se enfrentaba en 1924 a una situación que se parecía a una sublevación general.

Se retiró para poder acortar sus líneas, aunque hubo bastantes muertos, pero las consecuencias de la retirada afectaron tanto a la posición de Abd el Krim como a la actitud del ejército africanista. El dirigente rifeño tenía sus líneas a fines de 1924 a sólo 10 Km. de la capital del Protectorado y había conseguido controlar Gomara y Yebala. A principios de 1925 se convirtió en la autoridad indiscutible del Protectorado español. El ejército situado allí tenía que reaccionar airadamente ante los acontecimientos. Primo asumió la Alta Comisaría y además tuvo que enfrentarse con una insubordinación de la oficialidad. Entre los que protestaban estaban el general Queipo de Llano que fue relevado y el entonces teniente coronel Francisco Franco.

La victoria de Abd el Krim fue la causa del giro de Primo respecto al problema de Marruecos y de su posterior éxito. Los errores de Abd el Krim le permitieron modificar la situación en beneficio propio y de España. Abd el K. había alcanzado su máximo esplendor militar y político. Disponía de lo que se podía considerar como un Estado independiente con unos 100000 hombres bajo las armas y además su situación económica era buena. Contaba con el apoyo de la Internacional Comunista, pero su propio éxito le hizo cometer errores, tanto respecto a España como de Francia. Pudo haber negociado una posición de ventaja con España y renunció a hacerlo como si ya considerara liquidado al adversario e incluso renunció a atacar la zona oriental española y eligió como adversarios a los franceses. En abril de 1925 se produjo la ofensiva rifeña y se situó la vanguardia de Abd el K a 30 Km. de Fez.

En mayo de 1925 comenzaron conversaciones Francia y España y llegaron a una conclusión; había una acción militar coordinada (que hasta entonces había rechazado el ejército francés) y una lucha común contra el comercio de armas y a la vez se hicieron promesas de autonomía. Las tropas de ambos países aumentaron hasta 500000. Primo, ante lo que era un claro cambio de rumbo en su política se apresuró a declarar que en asuntos de interés patrio no hay que guiarse por el amor propio, ni negarse a la rectificación.

La operación del desembarco de Alhucemas se planteó como el resultado no de un avance desde Melilla, sino a base de la utilización exclusiva de la flota, la artillería y la aviación. El desembarco fue una operación casi exclusivamente española, aunque también participó la Marina francesa y se saldó con un éxito enorme y con sólo 16 muertos. Se atacó al adversario por la espalda con la posibilidad de dividir en 2 la zona por él dominada.

Todo sucedió en un corto espacio de tiempo. El desembarco tuvo lugar en septiembre de 1925; en abril de 1926 era Abd el K. el que pedía negociar. El dirigente rifeño se entregó a las tropas francesas que le desterraron a la isla de la Reunión. El gobierno español protestó porque pensaba someterle a juicio por haber exterminado a todos los oficiales que mantenía prisioneros.

A partir de 1927 Marruecos dejó de ser un problema para España. Esta victoria fue el triunfo más espectacular de Primo de Rivera. El régimen con esto, se atribuía haber eliminado un grave problema de la vida nacional, que los gobernantes anteriores, por la inestabilidad parlamentaria y la incapacidad para hacer un programa, no supieron enfocarlo. El desembarco de Alhucemas sentó las bases para la política exterior que después siguió la Dictadura.

7. POLÍTICA EXTERIOR

Primo dio un paso adelante en la modernización del servicio diplomático, no sólo en la representación en el exterior, sino también unificando la carrera diplomática y la consular. Su política exterior permaneció en el marco tradicional de lo que había sido la posición española en el contexto internacional, basada en su dependencia de Francia y Gran Bretaña por la situación geográfica. Las circunstancias (sobre todo por el buen resultado de las operaciones de Marruecos) favorecieron el que España tratara de contrapesar la influencia franco-británica con la de otros países, como Italia. Desde meses antes de que llegara al poder Primo, presenciaba la experiencia de la llegada del fascismo al poder. El mérito fue haber terminado unas largas negociaciones comerciales y haber ido con el monarca a Italia en 1923 y que pese a las apariencias no dejaron de manifestarse discrepancias entre los 2 regímenes sobre todo por lo que respecta a las declaraciones del Rey ante el Papa, las cuales irritaron a Mussolini. Este no dudó en aprovechar la ocasión para proponer al Dictador español una colaboración permanente entre los 2 países aunque se afirmó que ese acercamiento no perjudicaría la relación con otros países.

Primo se dio cuenta de que necesitaba a Francia para solucionar el problema marroquí; cuando Abd el Krim desapareció como enemigo se apoyó de nuevo en apariencia, en Italia, con la que firmó un tratado intrascendente. Era cuando España deseaba mejorar su posición en Tánger o en la Sociedad de Naciones. Así se explica que en 1927 Alfonso XIII fuera de nuevo a Italia y que una división naval italiana se presentara ante Tánger. Los intereses de los dos países en relación con Tánger eran incompatibles, pues España la quería para sí y Mussolini estaba de acuerdo en la internacionalización. La relación hispano-italiana en esa época sirvió a los 2 países para obtener ventajas propias, aunque pequeñas.

Lo esencial de la política exterior de España se explica por la relación con Francia y Gran Bretaña. A Francia no le gustaba la forma en que llevaba España el Protectorado marroquí y fue la potencia con la que hubo más conflictos. Gran Bretaña ejerció de mediadora.

Alfonso XIII y Primo se irritaron respecto a Francia por el Estatuto de Tánger. Esta ciudad tenía un componente hispánico fundamental; constituía además una posición clave desde

el punto de vista estratégico y como procedimiento para aprovisionar de armas a los rebeldes rifeños.

No de acuerdo del todo, acepto Primo la solución propuesta por Francia a principios de 1924. Alfonso XIII calificó dicho acuerdo de despiadado, mientras Primo juzgaba que se había menospreciado a España. El Estatuto demostraba la desairada posición española que controlaba sólo las aduanas, mientras que la autoridad indígena era nombrada por el califa (en realidad por Francia) y los otros puestos clave eran responsabilidad de naciones como Bélgica, cuya importancia e interés en la zona era inferior al español.

A España no le quedó más remedio que aceptar la situación, pero procuró hacerla inviable. En 1926 presentó de nuevo sus reivindicaciones solicitando la entrega de Tánger. El Foreign Office la calificó casi como chantaje al estar mezclada con otra cuestión, como era la permanencia española en el Consejo de la Sociedad de Naciones. En 1928 se llegó a un nuevo acuerdo que era el mayor control español sobre la ciudad y sobre la policía. También Italia mejoró su situación en la administración de la ciudad.

España tenía una posición importante en las Naciones Unidas como único neutral en la guerra y se mantenía, con carácter permanente en él, con ayuda de los países hispanoamericanos. La entrada de Alemania en 1922 con el mismo carácter que España llevó a los dirigentes españoles a hacer una reclamación. En 1926 España rechazó la ampliación del nº de puestos permanentes y a fin de año inició los trámites para desvincularse de la Sociedad de Naciones. Como en el caso de Marruecos, Gran Bretaña actuó de mediador. La resolución del problema de Tánger hizo que España volviera a la Sociedad de Naciones, siendo reelegida para su Consejo, aunque no con un puesto permanente.

En política exterior hay que destacar el estrechamiento de relaciones con Portugal e Hispanoamérica. Portugal tras participar en la guerra mundial no tenía mayor relevancia internacional, su situación económica era muy mala y sus colonias eran ambicionadas por potencias menores, como Italia y la Unión Sudafricana y además en ese país persistía la inestabilidad política. Cuando se establecieron unas buenas relaciones entre ambos países fue con el establecimiento en abril de 1926 de una Dictadura en Portugal, parecida a la española. Los gobiernos españoles prodigaban sus muestras de simpatía, sin intervenir; como la declaración de Primo de R. de que la cordialidad era un estado de las relaciones entre los 2 países. Se hicieron acuerdos entre ambos, como el relativo al aprovechamiento hidroeléctrico del Duero (1927) y el de conciliación y arbitraje (1928).

El interés de Primo en la política hispanoamericana se demuestra con la realización de la exposición de 1929. La sección de política del Mº de Asuntos Exteriores se dividió en 2, una de ellas dedicada a Hispanoamérica, dependiendo de ella una Oficina de Relaciones Culturales. Se crearon 2 embajadas más (Cuba y Chile) y la de Argentina (única que había, se cubrió con Ramiro de Maeztu; se fundaron también nuevas legaciones en Ecuador, Bolivia y Paraguay así como consulados.

8. EL DIRECTORIO CIVIL. INTENTOS DE CONSTITUCIONALIZACIÓN

El 13 de Septiembre de 1923 Primo de Rivera en su manifiesto al país, anunció que la nación sería gobernada por militares o por civiles, colocados bajo su patrocinio. 1º se optó por la 1ª solución. Él juró el cargo ministerial como único responsable, pero se rodeó de militares en

los que descargó la tarea de gobierno, dependiendo el M^o de Estado de un subsecretario bajo la directa dependencia de Primo de Rivera. Ese directorio era totalmente provisional. En diciembre de 1925 cuando el problema de Marruecos estaba encauzado, el general dio el paso hacia la constitución de un Directorio Civil, pero el problema era cómo volver a la normalidad constitucional. Si hubiera abandonado el poder en el momento de haber logrado la solución del problema de Marruecos, habría tenido el apoyo de los sectores más diversos de la política nacional.

Al seleccionar a los miembros de su gabinete, tuvo que recurrir a los partidos de turno. El Conde de los Andes y Yanguas eran miembros del partido conservador; Calvo Sotelo procedía del maurismo; Aunós había sido Secretario político de Cambó.

Al formar un Gobierno Civil no había hecho otra cosa que afirmar su voluntad de permanecer en el poder, pero no había indicado un camino preciso para salir del régimen dictatorial. Pasado 1/2 año optó por una vuelta a la normalidad que suponía el rompimiento con la legalidad constitucional existente hasta la fecha. A los 3 años del golpe de Estado convocó una especie de plebiscito informar que consistió en que los ciudadanos partidarios de la Dictadura firmaran en unos pliegos para testimoniar su adhesión a ella.

Primo dijo haber logrado entre 6 y 7 millones de sufragios. Así pensaba poder influir sobre la voluntad del Rey. Desde finales de 1926 hasta un año después, debieron ser los peores momentos de la relación con él, debido a una iniciativa del Dictador. Desde 1926 había estado anunciando la posible convocatoria de una Asamblea Consultiva, no elegida, cuyo papel sería facilitar el camino hacia la legalidad. Sánchez Guerra (conservador) declaró que la Asamblea era como una conspiración militar. La resistencia del monarca a la misma hizo que la cuestión se aplazara. En estos meses centrales de la vida del régimen, el centro de la atención de los gobernantes fue la regeneración de la política económica.

Pero un año después del Plebiscito (septiembre 1927), convocó dicha Asamblea Nacional consultiva demostrando haberse impuesto a los temores del Rey. La Asamblea debía preparar y presentar escalonadamente al Gobierno en 3 años y con carácter de anteproyecto, una legislación general y completa que sería sometida a un contraste de opinión pública y a la real sanción. Esto era demasiado vago y confuso para que la Constitución quedara modificada por la obra de una Asamblea no nacida de la voluntad popular. El monarca aceptó finalmente la convocatoria de la Asamblea al no ver otra salida al régimen y también porque una parte de los políticos del turno, como Gabriel Maura, estaba dispuesto a acudir a ella.

La Asamblea se reunió en febrero de 1928 y sus miembros representaban a las provincias (a través de Ayuntamientos, Diputaciones y la Unión Patriótica); a las actividades de la vida nacional (enseñanza, asociaciones) y entre 50 y 60 miembros eran asambleístas por derecho propio o representantes del Estado. Por esta composición, la oposición afirmó que la Asamblea se parecía a la reunida en 1808 para preparar el Estatuto de Bayona. El nuevo Organismo tenía una doble función: fiscalizar al Gobierno y engendrar una nueva legalidad. Los asambleístas gozaban de bastante libertad para la crítica al Gobierno, pero también alguna vez que lo hicieron, el Dictador les respondió duramente. Era una Asamblea cuya labor se desarrollaba a través de secciones y no en plenarios. De esas secciones, las dedicadas a Leyes Constituyentes, mantuvo un programa de trabajo continuado, dirigido a la elaboración de un nuevo texto constitucional y sus leyes complementarias.

En 1929 Primo podía presentarse como un liberal desencantado. El anteproyecto redactado tuvo limitaciones al ejercicio de los derechos, como correspondía a una Constitución autoritaria, pero al tratar de articular una fórmula organizativa que también lo fuera, multiplicó de hecho los poderes del Rey en contra de la opinión del proyecto de Primo; al monarca le correspondía el poder ejecutivo asesorado por un Consejo del Reino. La representación nacional se realizaba a través de una Cámara única. El Dictador acabó decepcionándose de esta fórmula.

9. LA POLÍTICA ECONÓMICA Y LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LOS AÑOS 20

Esta década se denominó como la de los felices 20. Primo de R. se vio beneficiado por una situación de auge económico, común a todas las latitudes y que él mismo no había contribuido a crear. En esa época, la Dictadura centró su propaganda en sus realizaciones económicas y éstas, junto con la solución dada al problema de Marruecos, constituyeron el aspecto más positivo. No cabe duda de que la política económica de Primo estuvo siempre estrechamente conectada con el nacionalismo regeneracionista, de lo que hay numerosas pruebas. Se crearon las Confederaciones Hidrográficas y dicha disposición tenía especial sentido en la cuenca del Ebro. La Dictadura fue heredera de un pasado cercano en que si se habían intentado muchas soluciones, el parlamentarismo inestable del momento fue incapaz de hacerlo.

El nacionalismo más o menos autárquico también fue una tendencia de la economía nacional a la que Primo dio alas y trató de llevar a la práctica de manera directa. El fondo ideológico de su pensamiento en temas económicos se basaba en un nacionalismo elemental. Había una multiplicidad de órganos consultivos con el Consejo de Economía Nacional a la cabeza, creado en 1924, del que dependía el Comité regulador de la producción industrial, sin cuyo permiso no podía instalarse ninguna industria.

Esa estructura consultiva favoreció el proteccionismo frente al exterior y la restricción de la competencia. Uno y otra formaron parte del intento de combatir la crisis económica heredada de la I Guerra mundial. En abril de 1924 una ley determinó los auxilios concedidos para favorecer la producción industrial. La protección arancelaria era ya muy fuerte después del arancel de Cambó en 1922 y no fue necesario aumentarla. El Consejo de Economía Nacional recomendaba un proteccionismo integral pero eso hubiera supuesto represalias en los productos que España necesitaba.

El comercio tuvo su aspecto negativo en las importaciones de materiales para obras públicas; las exportaciones de productos alimentarios aumentaban y disminuían las de minerales. El nacionalismo de Primo se demuestra en la creación del Monopolio de Petróleos. CAMPSA, creada en 1927, debía ocuparse de adquirir yacimientos transportes y refino, pero su fin primordial fue proporcionar un alivio a las necesidades fiscales. Hubo presiones por parte de las grandes compañías petrolíferas internacionales como consecuencia de la nacionalización. El bloqueo de dichas compañías tuvo como consecuencia en principio que CAMPSA tuviera que recurrir a importar petróleo ruso. El monopolio tuvo amplia repercusión en la economía nacional.

Hubo otro terreno: en 1924 la ITT logró la concesión del servicio de telefonía. Ya antes se había constituido la Compañía Telefónica; la empresa norteamericana era el 1^{er} accionista y la única capaz de proporcionar los recursos tecnológicos necesarios. Esta razón hizo que Primo hiciera una excepción en su defensa del nacionalismo económico.

Para la política hidráulica también se basó en su programa del regeneracionismo y también se basó en proyectos anteriores. La creación de Confederaciones Hidrográficas destinadas al aprovechamiento integral (energético, de riego y de transporte) de las cuencas de los ríos. Se puso en marcha la Confederación del Ebro gracias al cual mejoraron 100000 Ha. de riego y se crearon 70000 nuevas. A partir de 1927 las Confederaciones se extendieron por el resto del territorio nacional. Se financiaban como cajas autónomas que podían emitir empréstitos con el aval del Estado.

Otro aspecto importante fue el de las vías de comunicación. Obra de Guadalhorce fue la creación en 1926 del Circuito Nal. de Firms Especiales. Se construyeron unos 2800 Km. de carreteras. Parece que esto se hizo para atraer al turismo y se hizo gran propaganda de las carreteras españolas en el exterior, sobre todo en Gran Bretaña. Tanto el automóvil como el turismo aparecieron en España como fenómeno social de modernización. Con los ferrocarriles, la Dictadura inició el camino del intervencionismo. También la política de transportes fue financiada a base de cajas autónomas.

Desde el punto de vista social y económico no se produjo ninguna reforma fiscal. Calvo Sotelo como M^o de Hacienda enunció un plan de altos vuelos que suponía convertir los impuestos del producto en impuestos sobre la renta. Su labor debió limitarse a tan sólo un leve retoque sin que los principales problemas fueran tocados a fondo. Se presentó la oposición de los sectores conservadores que les apoyaban. En suma, fue la Deuda el gran motor de la expansión industrial.

A corto plazo, el efecto de la política económica de Primo fue muy bueno en la producción industrial. El gran beneficiario del desarrollo fue sin duda el sector pudiente de la sociedad española. De los años 20 data la conversión de la banca española en una banca nacional. La ausencia de transformación social ponía en peligro la posibilidad de desarrollo de la industria textil y además, al final de la década eran patentes otras limitaciones. El déficit presupuestario podía enmascarse, pero el desequilibrio de la balanza de pagos tuvo una consecuencia muy negativa, el aumentar las importaciones y disminuir las remesas de los emigrantes.

10. POLÍTICA SOCIAL

Primo de Rivera nunca pretendió una transformación social al tratar de la distribución de la propiedad agraria. Las fuerzas patronales mostraron desde el 1er momento su satisfacción por el golpe de Estado, al mismo tiempo Primo prometió a los sectores obreros una actitud de paternal intervención. En 1924 se creó el Consejo Nacional de Trabajo, Comercio e Industria; poco después el Instituto de Reformas Sociales que impulsó la legislación social, así como la inspección de las condiciones de trabajo y quedó integrado en la estructura administrativa del M^o de Trabajo. Ese año se creó también el Tesoro del Emigrante y la Dirección general de Emigración; se aprobó el subsidio de familias numerosas y el seguro de maternidad.

Lo más importante de la obra social y lo más criticado también fue su pretensión de hacer la organización corporativa. Pero se consideró como una imitación de la legislación corporativa italiana. Se basaba en el sindicato libre, pero a diferencia de lo que era la tesis católica, estaba tutelado y condicionado por el Estado y aunque era distinto del fascismo, tampoco se identificaba totalmente con la tesis católica.

La organización corporativa tenía al comité paritario que adquiriría el carácter jurídico de corporación de derechos públicos; también a las comisiones mixtas provinciales y por último a los consejos de corporación. En cada uno de esos 3 peldaños había una representación igual de patronos y obreros.

Los conservadores acusaron a la organización corporativa de estar dominada por el partido socialista en la representación obrera. El sindicalismo libre tuvo preeminencia en la organización corporativa en Cataluña y Levante, el católico en Navarra y Castilla y el socialismo en el resto de la península porque tenía mayor fuerza al haberse marginado el anarquismo.

Se puede decir que la organización corporativa contribuyó en parte a la paz social de la época dictatorial. Primo no prohibió las huelgas, pero de hecho, el número de ellas se redujo bastante y eso también lo justifica la desaparición del sindicalismo subversivo. Hay que aclarar que los beneficios principales obtenidos por la clase obrera se debían más a la estabilidad del empleo y la extensión de la S.S. que de la concreta mejora de las condiciones de trabajo logradas a través de la negociación.

11. DICTADURA Y MOVIMIENTO SINDICAL

Parece raro que el régimen encontrara tan pocas dificultades con el movimiento sindical. Una de las razones fue la mejora de la situación económica que hizo desaparecer la tensión. Primo siempre pretendió que los socialistas colaboraran con él y durante un tiempo lo logró; sólo se limitó a restringir su propaganda o a vigilarla. A los anarquistas y comunistas, sí los persiguió sobre todo a sus dirigentes más subversivos. Fue asombrosa la rapidez con que se restauró el orden público. El responsable del mismo era Martínez Anido.

Lo más espectacular de las relaciones entre movimiento obreros y Dictadura fue la colaboración del partido socialista. El golpe de Estado fue considerado por este partido como un desplazamiento de una clase política corrupta en beneficio de algo, que podía volver a la situación liberal: "serenidad sí, indiferencia no", decía El Socialista el día del golpe. La propaganda de Primo insistía en que el único partido honesto y real de la etapa anterior al nuevo régimen era el Socialista. Hubo un momento en que el Dictador insinuó que podía crear un sistema de turno con él y con la Unión Patriótica. Pero también temía que el PSOE se decantara en un sentido revolucionario.

Los socialistas, en relación con la Dictadura, terminaron teniendo motivos de división interna. Hubo opositores cerrados como los que se identificaban con el republicanismo o que se decían herederos de la tradición liberal (Prieto o De los Ríos); los que representaban a un sector social con graves problemas y que pretendían negociar una salida con el Gobierno (como el dirigente minero asturiano M. Llaneza), practicaron el colaboracionismo desde el principio y eran la mayoría.

Francisco Largo Caballero indicó que era necesario un partido socialista más estrictamente sindical sin la separación practicada PSOE y UGT; esto favorecía el colaboracionismo. Por otra parte, en 1925 murió Pablo Iglesias, que probablemente estaba de acuerdo con la postura colaboracionista, pero su sustituto Julián Besteiro repudiaba cualquier tipo de régimen burgués, pero estaba dispuesto a una colaboración parcial en los aspectos que interesaba al socialismo.

Hasta la convocatoria de la Asamblea Nacional, la actitud colaboracionista fue la más marcada y sólo se modificó al final del régimen. El Inst. de Reformas Sociales se convirtió en Consejo de Trabajo, ampliando el Consejo de Estado y siendo Largo Caballero un vocal de representación obrera en el mismo, elegido por los miembros de su partido. Aparte de la elección por los propios obreros, hubo otro requisito de los socialistas para participar en organismos consultivos: la ausencia de sindicatos que ellos consideraban como amarillos" (católicos y libres).

Cuando se convocó la Asamblea Nal. comenzó el despegue de los socialistas que no aceptaron los puestos que se le adjudicaron sin la elección de su propio grupo político. Surgió la ruptura. Pero en 1929, Primo en el declive de la Dictadura, estuvo dispuesto a aceptar a 5 representantes de la UGT elegidos por ella misma.

En ese momento no sólo fue aceptada la propuesta, sino que en el congreso posterior del PSOE, éste se declaró a favor de la República. En estos tiempos finales hubo represiones en contra de sindicalistas socialistas.

La evolución de la CNT fue muy diferente. Se había destruido a sí misma antes y el sector terrorista estaba muy distanciado de los sindicatos. La política de la dictadura en principio no fue persecutoria, sino que fue aumentando poco a poco la presión, haciendo que los sindicatos cumplieran la legalidad vigente en lo que se refería a la publicidad del destino de sus cotizaciones. Además, la Dictadura agravó la discordia que existía en su seno entre quienes practicaban el terrorismo y quienes sindicalistas, mantenían una posición posibilista. El 1^{er} momento en que se planteó la división del anarco-sindicalismo fue poco después del golpe de estado. Cuando se pasaron a la clandestinidad.

En Julio de 1927 se creó la Federación Anarquista Ibérica que se significó pronto y más tarde más, por su posición insurreccionalista.

El PCE siguió siendo un pequeño grupo. Sus reuniones directivas a menudo se celebraron en el exterior y en ella tuvo siempre un papel decisivo la m Internacional.

El sindicalismo libre y católico era favorecido por el apoyo gubernamental. Los libres lograron dominar una parte considerable del sindicalismo barcelonés. Con el sindicalismo católico sucedía que por un lado, parte de sus dirigentes fueron atraídos hacia la colaboración con el régimen en puestos políticos, pero a la vez, las quejas eran frecuentes contra el supuesto colaboracionismo con la UGT por parte de Primo de Rivera. El sindicato católico se sintió marginado a pesar del relevante papel que algunos de sus militantes tuvo en la Unión Patriótica.

LA DICTADURA Y EL FIN DE LA MONARQUÍA (II)

1. LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: LOS PARTIDOS DEL TURNO Y LOS REPUBLICANOS

Uno de los factores que explican el mantenimiento de la Dictadura es la impotencia de la oposición que no se debió a los medios represivos utilizados en su contra porque no se prohibió ningún partido político, sino que periódicamente se puso sordina a sus actuaciones. La propia censura no podía calificarse como fuertemente persecutoria.

Sería lógico pensar que como la Dictadura desplazó del poder a los partidos de turno, encontrara gran oposición en ellos, pero no fue así; el golpe de estado se consideraba inevitable. Romanones afirmó que la Dictadura hubiera hecho posible olvidar su "pecado original" si hubiera durado poco y se hubieran limitado a arreglar el problema de Marruecos. Los incidentes con los opositores tuvieron muy poca trascendencia.

La irritación de la "vieja política" aumentó con el paso del tiempo. Las acusaciones de inmoralidad colectiva a las que la sometía el Dictador, podían considerarse como un ataque no personal, pero siempre que no fueran muy tenaces. La actuación con respecto al caciquismo pudo tener una gran efectividad, pero contribuyó a desorganizar los sistemas clientelísticos en los que se basaba la política de turno. La oposición de la vieja política era poco peligrosa para el Dictador, que disponía de la posibilidad de limitar la propaganda contraria, pero además, los miembros de los partidos de turno no eran dados a esta forma democrática de actuación. La política que ellos siempre habían practicado era la de "notables", basada en la desmovilización y no podían recurrir a unas masas de las que siempre habían estado alejados. En esas condiciones, la protesta de los políticos de turno quedó reducida a gestos más o menos aparatosos, pero inocuos para Primo de Rivera.

En los primeros meses de Dictadura, el procedimiento principal de actuación de la oposición liberal y conservadora fue tratar de influir en el Rey para marginar a quien él había aceptado como Dictador. Alfonso XIII se daba cuenta de lo que se jugaba con la admisión del régimen dictatorial, pero éste, al menos a corto plazo, le daba la sensación de ser una solución viable y a la vez cómoda. Trató de moderar a Primo, pero éste era difícil de controlar en cualquier aspecto. Luego los políticos del turno empezaron a plantearse la posibilidad de recurrir al Ejército. La conspiración militar se inició en los medios liberales, pero tan consciente era de su necesidad Sánchez Guerra que en principio opuesto a colaborar con los militares, acabó por reconciliarse con el general Aguilera a quien él mismo había apartado del camino hacia el poder. Sánchez Guerra, aunque intelectualmente limitado, tenía un carácter entero y fama de austeridad. A su actitud se debe que Alfonso XIII decidiera aplazar durante un año la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Cuando finalmente en 1927 ésta se produjo, el político conservador, abandonó el país.

Si la Dictadura mostró las limitaciones de la política del turno, también puso en claro las de los republicanos. Estos no podían influir en el monarca, pero también era difícil que influyeran en el Ejército. Lerroux mantuvo una posición parecida a la de los monárquicos

liberales respecto del golpe de Estado. En principio parece haber estado a la expectativa, pero luego trató de influir en los medios militares a través de cartas de difusión restringida. En estas condiciones, la celebración del Aniversario de la I República en febrero de 1926 les permitió crear una coalición bajo el nombre de Alianza Republicana. Bajo ella se agruparon los grupos locales que constituían el republicanismo cada vez más moderado y para quien el líder iba siendo Lerroux. Mayor repercusión tuvo la actuación de Blasco Ibáñez en el exterior, donde era bien conocido como escritor; se dedicó a escribir folletos difamatorios contra el Rey, carentes de fundamento, pero efectivos entre los medios de izquierdas.

Azaña representaba un republicanismo nuevo, que si no sustituyó al antiguo, ni tuvo posibilidades reales de desplazar a Primo de Rivera, evolucionó en un sentido que habría de tener relevante influencia en la vida política de la 11 República; él preveía exigir a la UGT un programa de reformas sociales y realizarlas desde el poder, con la colaboración de los socialistas.

2. LA DICTADURA Y LOS PROBLEMAS MILITARES

Las primeras muestras de oposición militar al régimen de Primo obedecieron a factores personales importantes y motivos políticos no determinantes. El general Cavalcanti había sido colaborador del Golpe, pero pronto se decepcionó porque éste no tuvo como consecuencia la constitución de un gabinete civil; fue nombrado jefe de la Casa militar del Rey y parece ser que bordeó la conspiración militar.

No tuvo tampoco trascendencia el hecho de que algunos militares con puestos de delegados gubernativos se enfrentaran con el Dictador que los había nombrado por haber cumplido su misión con excesivo celo o por enfrentarse con un cacicato propicio al régimen.

La oposición militar no tuvo un aglutinante político hasta 1925 que es cuando empezó a adquirirlo y progresivamente se fue radicalizando desde una actitud liberal y con deseos de restablecer el sistema constitucional, a una proclividad hacia el republicanismo. Se formaron bajo la dirección de Segundo García unas Juntas Militares que tenían la misión de facilitar medios a las viudas de los caídos en acción, pero que sirvieron para un propósito conspiratorio (conspiración que resultó abortada). En 1926 los generales Weyler y Aguilera empezaron a conspirar con la vieja política; lo que deseaban era que regresara el liberalismo oligárquico y su propósito era evitar cualquier desvío hacia la República. La colaboración entre políticos y militares se hizo manifiesta en los sucesos de la noche de San Juan (Sanjuanada) en junio de 1926.

Lo que sucedió entonces no estuvo bien organizado; pero demostró que una parte del Ejército y la política civil anterior al golpe, habían coincidido. Weyler parece que fue el iniciador de la conspiración cuyo manifiesto sin embargo, no suscribió. Estaba redactado por Melquíades Álvarez y suscrito por Aguilera. La trama era muy endeble y estaba condenada de antemano. Primo aprovechó para sancionar a los militares que intervinieron junto a los políticos profesionales monárquicos y republicanos y periodistas e intelectuales como Marañón.

La ruptura de la unidad del Ejército la produjo el conflicto artillero y no la sanjuanada. El dictador había pensado en promover un sistema de ascensos basados en la calidad y no en la antigüedad defendida por los militares africanistas en contra de los peninsulares y los junteros. Cuando transformó la Junta de Clasificación para los ascensos fue inmediatamente acusado de hacerlo para introducir el favoritismo.

El conflicto más grave que se le presentó a la Dictadura al tratar de aplicar estos procedimientos de ascenso, fue en el Cuerpo de Artillería. Desde noviembre de 1923 Primo quiso cumplir ese propósito, debiendo renunciar los oficiales de Artillería a sus ascensos obtenidos de esta forma. En 1926, con un decreto, relevó de sus promesas previas a los oficiales de Artillería que hubieran renunciado a los mismos. La protesta fue encauzada por la intervención del rey, pero los malentendidos y el empeinamiento de Primo, hicieron que el enfrentamiento se hiciera muy grave: se impuso a la Artillería el sistema general de ascenso y cuando los ascendidos quisieron presentar las instancias de retiro y se resistieron, acuartelándose, el Gobierno declaró el estado de guerra y suspendió a toda la oficialidad de Artillería. Se produjeron graves incidentes en la Academia de Segovia y en la de Pamplona. En teoría, el Gobierno triunfó: confinó a los oficiales de Artillería, redujo los efectivos del Arma y obligó a los que quisieran volver a su situación anterior a jurar fidelidad al Gobierno como hicieron.

El movimiento artillero hizo que se rompieran las relaciones del Dictador con el Ejército y le proporcionó un enemigo tenaz. Pero hubo algo peor: que no sólo afectó al régimen, sino también a la monarquía. El Rey trató de intervenir en el ejercicio de su función mediadora, pero Primo amenazó con dimitir, dando publicidad a los motivos de los artilleros. El Rey cedió y para la Artillería esa actitud fue juzgada como la evidencia de una connivencia entre ambos.

La creación de la Academia General Militar en Zaragoza, está en relación con la voluntad homogeneizadora que el general quiso imponer en el Ejército. La dictadura trató también de perseguir las inmoralidades administrativas, expulsando a algunos oficiales.

3. LA DICTADURA Y LOS INTELLECTUALES

Primo acabaría enfrentándose también con la intelectualidad. Había una modernización creciente en la sociedad española y la educación se había desarrollado mucho. En esta España más culta, no es extraño que la postura política de los intelectuales tuviera una especial relevancia social; además, el carácter del Dictador provocaba en su contra a los intelectuales. Su formación era escasa y no tenía inconveniente en enfrentarse públicamente y ante la opinión, con escritores a los que no entendía ni respetaba.

Primo y los intelectuales tenían algo en común: el regeneracionismo; por eso Azorín y Ortega mostraron una benevolencia respecto al golpe militar. Hubo también opositores como Unamuno, Pérez de Ayala, Araquistain o Azaña, pero también quienes como D'Ors o Maeztu, habían evolucionado desde sus posturas liberales a otras de creciente autoritarismo.

El 1^{er} enfrentamiento entre los intelectuales y Primo fue en 1924 y supuso la consagración de Unamuno como el representante 1º de la protesta en los medios culturales. Había expresado en una carta privada, juicios muy duros sobre el nuevo régimen. En su postura había un eco de su posición liberal y también un enfrentamiento casi personal con el Dictador y con el monarca. Por ello, fue confinado en Fuerteventura, de donde escapó. Durante el resto de la Dictadura estuvo en París, donde tuvo una crisis personal y una vez superada, se dedicó al libelo político. Sus juicios acerca de la Dictadura de Primo eran durísimos, aunque no siempre justos. Logró que se identificaran con él los miembros de la vieja Generación como Machado, Blasco Ibáñez y Valle Inclán.

Durante la mayor parte de la Dictadura, los sectores intelectuales oscilaron entre la postura de Unamuno y la de Ortega y Gasset. Este trató de establecer una clara distinción entre el mundo político y la reflexión intelectual que quería desvincular de la situación española. También reflexionó Ortega y más que estar a favor de la Dictadura, lo que hizo fue manifestar su repudio al régimen anterior y su confianza en la posibilidad de que una dictadura regeneracionista se hiciese eco de alguna de sus propuestas. Al final, renunció cuando se censuraron sus artículos.

De manera sucesiva se produjeron conflictos entre el régimen y los intelectuales: la persecución de la lengua catalana, la censura, el inicio del curso 1924 en que el catedrático Sainz Rodríguez atacó a Costa e indirectamente a las ideas regeneracionistas del directorio, etc. Entre las figuras más destacadas de esa oposición intelectual merecen mención De los Ríos, Jiménez de Asúa y G. Marañón. En 1926 Primo aceptó un doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca y argumentó su derecho a recibirlo diciendo ser doctor en ciencia de la vida. Desde ese momento, no hubo ya tolerancia del mundo intelectual respecto a su persona. Incluso Benavente que le apoyó en principio.

Aunque el Gobierno modificara en un sentido conservador la Junta de Ampliación de Estudios, en realidad no tuvo una política cultural específica y partidista. La Generación de 1927 se caracterizó por su voluntad de eludir cualquier tipo de compromiso social. Surge en estos años en España y en todo el mundo, como expresión literaria, la protesta contra la guerra y el patrioterismo.

El desarrollo de esa literatura coincidió con la protesta intelectual generalizada, fenómeno de relevancia política a través de la protesta de los estudiantes, ya en la fase final del régimen. Los 1^{os} conflictos tuvieron lugar en 1925-26. A comienzos de 1927 nació la Federación Universitaria Española (FUE) que en principio tenía carácter profesional y que pronto lo tuvo político. Los problemas del Régimen con los estudiantes tuvieron su origen en una iniciativa de Primo y sus colaboradores: con las órdenes religiosas hizo que en el Estatuto Universitario de marzo de 1928 se incluyese un artículo por el que los centros universitarios no oficiales con más de 20 años de existencia podrían realizar sus exámenes mediante tribunales compuestos por 2 miembros del centro y uno de la Universidad estatal. La disposición sólo afectaba a los agustinos de El Escorial, que renunciaron a ese derecho y a los Jesuitas. A las huelgas de los profesores se sumaron los estudiantes.

En 1929 graves incidentes estudiantiles hicieron que se cerraran la mayor parte de las Universidades y la reacción de Primo fue muy poco hábil pues trató de arreglar el desorden con medidas rigurosas (pérdida de matrículas) o mostraba una voluntad de intervenir en el Gobierno de la Universidad, contraproducente incluso para la propia institución monárquica. Los estudiantes se politizaron en sentido republicano. Tenía una procedencia social burguesa y con su protesta daban más relevancia a la de los intelectuales y éste acabó por decantarse beligerantemente contra el régimen, dada la falta de tacto de Primo. Además, sus declaraciones tuvieron como consecuencia la beligerancia final de los intelectuales: Sainz Rodríguez que había aceptado un puesto en la Asamblea Nacional, la abandonó y Azorín escribió contra la ofensiva del Dictador respecto a la Universidad. Ortega dimitió de su cátedra, igual que Sánchez Román o García Vacas. Algunos intelectuales más politizados (Jiménez de Asúa o Marañón) evolucionaron hacia el socialismo.

4. EL COLAPSO DE LA DICTADURA

Inició su declive en 1928. Los éxitos estaban ya lejanos y a la decadencia física de Primo de R. había que añadir la incertidumbre al imaginar la articulación política de un nuevo régimen; es posible que en 1929 tuviese deseos de abandonar el poder. La murmuración contra el arbitrio y la sensación de ridículo, hicieron más, en contra del régimen que las propias conspiraciones. Estas arreciaron ese año. A finales de enero, estalló una en Valencia con Sánchez Guerra y fue como un pronunciamiento con la voluntad de evitar que se alterara el orden social; se trataba de conseguir un retorno al sistema liberal anterior. Los conspiradores se encontraron con que el apoyo real que tenían era muy inferior al esperado. El general Castro Girona acabó echándose atrás, lo que impidió el fracaso de la intentona. Cuando fue juzgado Sánchez Guerra se convirtió de acusado en acusador y además resultó inocente.

La 1ª reacción de Primo ante las dificultades, consistió en endurecer su régimen, pero siempre con la conciencia de que no había de ser sino una solución provisional. Pasada la 1ª reacción, Primo opta por el abandono del Poder, sin tener en cuenta lo que eso podía suponer para la Monarquía. Las soluciones de transición que imaginó fueron tardías o contradictorias. En Julio de 1929 trató de ampliar la Asamblea consultiva a la representación corporativa y los antiguos presidentes del Consejo de Ministros, pero el resultado fue decepcionante.

Ya en declive ante la opinión, vio que sus esfuerzos para ampliar la base de su régimen eran vistos como un signo de debilidad. Hasta sus propios ministros le insistían en la necesidad de llevar a cabo una consulta electoral que pusiera fin a su régimen. En dic. de 1929 propuso un nuevo plan al Rey que consistía en convocar una Asamblea única formada por 250 senadores y 250 diputados. Este proyecto tenía el doble inconveniente de no tener nada que ver con la Constitución de 1876 ni con el anteproyecto elaborado por la Asamblea Nacional. La idea de Primo era también que el Conde de Guadalhorce presidiera la transición. Alfonso XIII pidió tiempo para estudiar la solución propuesta.

Mientras, la coyuntura económica positiva de los años 20 se deterioró; cayó la peseta. Una comisión presidida por Flores de Lemus estudió la posibilidad de implantar el patrón oro, pero pronto se hizo patente que en el descenso de la peseta había factores muy diversos: de carácter político que derivaban de la incertidumbre del propio régimen. Los conflictos sociales reaparecieron en 1929. La tensión social era el resultado de la situación política. Ella colaboró a la conspiración militar que en Andalucía, cuyo capitán general era D. Carlos de Borbón, se llevaba a cabo prácticamente a la luz pública, especialmente en Cádiz, donde la protagonizaba el general Goded. Si Primo de R. no hubiera decidido por sí mismo retirarse, una conspiración militar hubiera acabado con él.

El Dictador por su cuenta y sin advertir al Monarca, dirigió una consulta a los altos cargos militares que le dijeron que podía contar con su apoyo siempre que tuviera también el del Rey. La consecuencia fue la inmediata dimisión. No es extraño que el Rey mostrara una "disimulada indignación y digna severidad" ante lo sucedido, pues por ese procedimiento no sólo se le ignoraba por completo, sino que además se suprimía la opinión pública e incluso no se tenía en cuenta la de la mayor parte del Ejército. Su abandono de la política no era ya un sacrificio, sino una liberación para él.

Muchos han considerado el régimen dictatorial como antecedente directo del franquismo. Suele ser habitual señalar lo positivo de la gestión de Primo de R. en el terreno económico y respecto a Marruecos y lo negativo, en el terreno político. Este balance negativo era en última instancia, inevitable por la propia simplicidad del regeneracionismo que alimentaba las posturas del Dictador. Desde el punto de vista de la Monarquía, este último resultó muy grave, pues según Gabriel Maura, era una ofensa el hacer creer al pueblo español que se mantuvo la Dictadura firme año tras año, sin otro apoyo que el del Rey y la camarilla militar del Dictador el régimen iniciado con fuerte apoyo popular, lo mantuvo parcialmente. La oposición no reconoció este apoyo y atribuyó al monarca la gestación y el mantenimiento del régimen. El Rey por otro lado con sus declaraciones y decisiones había quedado dependiendo de la Dictadura, de modo inevitable.

Alfonso XIII fue culpado de los males de la Dictadura e incapaz de apuntarse ninguno de sus éxitos y no era responsable ni de uno ni de otros y probablemente había seguido al decantarse por ella, la propia evolución de la opinión pública. Esta era más consciente y protagonista que en el comienzo del siglo y ahora pudo exigir responsabilidad al monarca.

5. EL ERROR BERENGUER

Cuando surgió la crisis del régimen dictatorial, Cambó escribió un libro: *Las Dictaduras*. Al gobierno de transición le recomendaba, además de mantener el orden público, que no "cayese en el apasionamiento de juzgar abominable todo lo que la Dictadura había hecho" y que no juzgara como óptimo las cosas anteriores a ella. Estos consejos eran imprescindibles dada la situación que el país vivió al final de la Dictadura de Primo. Uno de los procesos políticos más difíciles era el tránsito de una situación dictatorial a otra de normalidad constitucional. Al final llegaría el colapso de la Monarquía para sorpresa de todos, incluso republicanos.

El que se encargó de sustituir a Primo fue el también general Dámaso Berenguer que durante los 6 años anteriores se significó por su moderada oposición al régimen era el más liberal de los 3 sugeridos por el Dictador al Rey los otros dos fueron Martínez Anido y Barrera. Cuando anunció sus propósitos de volver a la constitucionalidad, la opinión pública le fue favorable y sus medidas liberales fueron bien acogidas. En sus los meses parece que desaparecieron las conspiraciones militares. Desde el principio también se observaron graves deficiencias en su gobierno, además hay que indicar la inquina contra el monarca. Otro fallo de Berenguer era la lentitud que imprimió a su acción de gobierno.

Su gabinete mantenía las prerrogativas autoritarias de la Dictadura, pero decía caminar hacia la legalidad constitucional aunque lo hacía con morosidad. Los comentaristas calificaron a este sistema como la "dictablanda". Esa lentitud hacía que se deteriorara su popularidad. La razón podía ser el exceso de optimismo de Berenguer.

Una de las cosas que hizo mal fue el querer volver atrás, como si eso fuera posible. Sólo tuvo el ofrecimiento franco y desinteresado de un sector público, a la hora de formar su gobierno: el de Bugallal que representaba el más caduco producto del caciquismo conservador. Su gobierno se apoyaba sobre la tradicional corrupción política del mundo rural, indiferente y pasivo y su política económica mantuvo una postura anacrónica.

Sin embargo había algunas soluciones que dentro de la Monarquía, habrían sido más renovadoras y lo más importante es que el Rey Alfonso XIII no había tenido inconveniente en

aceptarlas. En ese momento, Alfonso XIII tuvo que tomar las decisiones más difíciles de su vida: desde los extremos del espectro político, una actitud y la contraria, le eran exigidas en nombre de altísimos deberes. Es probable que si hubiera podido, hubiera abandonado el trono; ante Alba se mostró dispuesto a celebrar un plebiscito sobre su persona y llegar a la reforma constitucional. Fue éste uno de los posibles protagonistas de una solución más renovadora. El Rey se entrevistó con él en París en junio de 1930 y aceptó en principio la resolución de un Gobierno de Izquierdas, pero Alba tuvo falta de decisión y audacia y carecía de afectos monárquicos que le impidieron hacerlo.

Cambó, enfermo, tuvo que actuar entre bastidores. La Lliga igual que en 1918 se lanzó a una campaña de propaganda en toda España con más sentido renovador que el que tenía el gobierno. Factor importante de esta campaña fue la creación, ya con el gobierno de Azaña, de un Centro Constitucional del que formaban parte los regionalistas, los antiguos mauristas, sectores católicos que luego militarían en la CEDA... Este partido llegó demasiado tarde como para renovar la política monárquica.

El error de Berenguer, decía Ortega, no era el que hubiera cometido errores, sino que otros los habían cometido al hacerle presidente del Consejo de Ministros. Si se pensaba que la vuelta atrás era posible, es porque se opinaba que los españoles pertenecen a la familia de los ovinos, pero ahora, opinaba Ortega, el pueblo español había cambiado.

6. LA CRECIDA DE LA OPOSICIÓN

Con frases del propio Berenguer, España fue como una botella de champán que se destapa. La opinión pública empezó a desempeñar un papel activo en la política. A ello ayudaba la difícil situación económica que empezaba a percibir las 1^{as} consecuencias de la crisis de 1929, mientras que en algunas provincias andaluzas la sequía provocaba paro y huelgas. Tanto el Rey como Berenguer sufrieron la ofensiva violenta de los descontentos de la derecha y la izquierda.

Cuando Primo de Rivera abandonó el poder, Alfonso XIII le dijo que salvaba por 2^a vez a España. La Unión Patriótica se convirtió en Unión Monárquica Nacional. Buena parte de sus miembros pensaban que el gabinete de Berenguer era mediocre; para los jóvenes de este partido, el mal estaba en el régimen constitucional y parlamentario, en los mismos fundamentos liberales de la Restauración.

La oposición al gobierno de Berenguer corrió a cargo del lado de la izquierda moderada. La CNT empezó su reconstrucción; en mayo de 1930 se autorizó su legalidad y se puso en contacto con los republicanos. Mola y Berenguer mantuvieron cierta relación con sus líderes más moderados, pero protegieron al sindicato libre. En la UGT y el partido socialista, empezaba a predominar la tendencia más claramente antimonárquica representada por Indalecio Prieto, furioso adversario personal de Rey desde el Ateneo de Madrid.

Las clases medias también se mostraban desviadas de la persona del Rey. Un grupo de políticos que se habían significado por su oposición al régimen dictatorial, formaron el llamado Partido Constitucionalista. Carecían de apoyo popular y el mismo hecho de su edad, hacía difícil que pudiera arrastrar a las masas. Sin embargo parecían mucho más motivados por razones ideológicas y no por deseos de poder. Lanzaban reticencias e insinuaciones contra el monarca, sin llegar a proclamarse republicanos (Sánchez Guerra, Burgos y Mazo, Bergamín y Melquíades

Álvarez). Sólo hubo 2 políticos monárquicos que hubieran ocupado puestos importantes y que pasaban la línea entre Monarquía y República.

Miguel Maura, con el carácter liberal del maurismo y su antialfonsinismo, acabarán por producir una de las vertientes del republicanismo, y Osorio Gallardo. Menos impetuoso que Maura, Niceto Alcalá Zamora, tardó mucho más en decidirse. En abril de 1930 lo hizo, solicitando para España un régimen político republicano pero esencialmente conservador desde el punto de vista político, social y religioso.

El republicanismo histórico permanecía marginado ante esta oleada de pronunciamientos antialfonsinos o antimonárquicos. Sólo el sector que dirigía Lerroux tenía alguna organización. Durante el Gobierno de Berenguer se produjo un cambio importante en el republicanismo español; su apariencia exterior fue menos demagógica, bohemia y anticlerical que antes. Transformó su apariencia exterior a base del apoyo de nuevas clases sociales y sobre todo de una movilización política de las masas.

El Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 fue la consagración de la alianza entre los 2 tipos de republicanos (el nuevo y el viejo) Además de Alcalá Zamora, Miguel Maura, Azaña, Lerroux, participaron también en la reunión, miembros del catalanismo republicano (la antigua Acció Catalana) y del galleguismo (Casares Quiroga). Indalecio Prieto representó al socialismo. Así el Gobierno de Berenguer quedaba cada vez más marginado de las fuerzas políticas reales. A partir de ese momento existió un gobierno provincial republicano que en Madrid se reunía en el Ateneo y estaba presidido por Alcalá Zamora.

La colaboración de un importante sector de intelectuales y una parte del Ejército, acrecentó la fuerza del republicanismo. Los 1^{os} acudieron a la llamada de una Agrupación al Servicio de la República que nació tras un manifiesto de Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Marañón. Con respecto al Ejército, los republicanos se veían favorecidos por la existencia de una protesta general. Quizá el mejor representante de la tradición conspiratoria militar fuera el general Queipo de Llano. Algunos intelectuales como Salvador de Madariaga, no colaboraron con el republicanismo. Hubo un intento de golpe en Dic. de 1930, pero había una gran desorganización en las filas de los conspiradores contra la monarquía. Las masas obreras estaban generalmente pasivas, pues en Madrid, Besteiro aconsejó la colaboración con el movimiento.

Mientras, el gobierno de Berenguer pasaba una fase crítica. Su lentitud en la acción había enajenado a la Monarquía. La crisis surgió con el problema de las elecciones. Su anuncio produjo una oleada de amenazas de abstención, desde fines de enero de 1931 hasta mediados del mes siguiente: a continuación los constitucionalistas, republicanos, socialistas y Alba, dijeron que no irían a las urnas y por último, también lo hicieron los liberales y Cambó.

7. EL ERROR DE AZNAR Y LAS ELECCIONES DEL 12 DE ABRIL

La crisis política no tuvo fácil solución. El Rey se dirigió a Alba que se negó a colaborar y luego a Sánchez Guerra ya Melquíades Álvarez. Sánchez G. pidió (grave error) el con curso de los republicanos que lo rechazaron Los dos renunciaron a presidir el Gobierno porque el Rey no aceptó algunos de los nombres propuestos como ministros.

El Gobierno de Aznar tenía carácter de concentración monárquica en colaboración regionalista; Tomaron parte desde la derecha representada por De la Cierva y Bugallal a la

izquierda de García Prieto y Romanones, pasando por Berenguer, Ventosa y el duque de Maura. Aznar prometió convocar elecciones. Los propósitos del gobierno eran liberales: Aznar había sido uno de los pocos militares que se opuso al golpe del 23. Pero no se puede decir que el nuevo gobierno tuvieran carácter renovador. Además, era totalmente heterogéneo y sin dirección. Aznar había sido elegido por ser muy mediocre en política, como para no asustar a nadie. En los mayores momentos de peligro de la Monarquía, se dedicó a leer a Rocambole y a Trotski y pudo ser considerado como un juguete de Romanones. Los ministros carecían de un programa común y en los momentos difíciles actuaron cada uno por su cuenta.

El Gobierno monárquico no consiguió calmar la agitación de la opinión pública. Los disturbios universitarios siguieron y ante ellos no se adoptó una política coherente por las tensiones entre los miembros del Gabinete. Aznar convocó elecciones municipales y las llevó a cabo rápidamente. En éstas, resultaba más clara la diferencia de comportamiento entre el mundo urbano y el rural. Hubo gran incertidumbre en los resultados, pues eran imprevisibles y fue una novedad que el poder público no interviniese.

Otro rasgo fundamental fue la apatía de los monárquicos que casi no hicieron propaganda y fueron a las elecciones, desunidos. Tanto la Unión Monárquica Nacional como los monárquicos liberales temían que su alianza tuviera efectos contraproducentes para sí mismos. Lo único que le quedaba a la Monarquía eran los caciques, capaces de artimañas, pero no de enfrentarse a un despertar de la opinión pública nacional. Esta se produjo y es el rasgo más importante de esas elecciones.

Los resultados de la elección han sido muy discutidos. Siempre, durante el reinado de Alfonso XIII se había dado distinta importancia a los resultados de los núcleos urbanos y del medio rural. Ahora, en los 1^{os}, la Monarquía sufrió un descalabro; las capitales de provincias dieron la victoria a las izquierdas. Las diferencias eran aún mayores en votos que en concejales (en Madrid el triple que los monárquicos, y en Barcelona, el cuádruplo).

Por vez primera en España el Gobierno era derrotado en unas elecciones. Votaron las zonas que se habían pronunciado en contra de una Monarquía que en el ámbito local no estaba ya representada por ninguna fuerza renovadora, sino sólo por los caciques. En el medio rural se había continuado sin votar.

8. LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE LA MONARQUÍA

Los resultados de las elecciones sorprendieron al país, a los monárquicos y a los republicanos, que no esperaban ese éxito. Después de la proclamación del nuevo régimen, varias figuras del monarquismo debatieron las responsabilidades de este hecho. Cualquier cosa que se hubiera intentado para mantener el régimen habría sido un fracaso y con derramamiento de sangre. Cada sector político monárquico optó por su propia actuación independiente sin consultar a los demás. El general Berenguer envió a los altos cargos militares un telegrama por el que pretendía apartar al Ejército de la política partidista.

El Duque de Maura, a espaldas del Consejo de Ministros, se puso en contacto con los republicanos para llegar a un acuerdo en relación con las elecciones legislativas, sin lograr nada de ellos. Romanones no veía otra posibilidad que la ordenanza de transmisión de poderes.

Consciente de la derrota, su actitud fue la de hacer los máximos esfuerzos para que la caída de la Monarquía se hiciese en el menor daño posible.

El desarrollo de los acontecimientos consiguió convencer a los miembros del gobierno provisional republicano de la posibilidad de tomar enseguida el poder.

El Rey, de acuerdo con sus consejeros, pensó en principio abandonar temporalmente el Trono, hasta las elecciones legislativas, pero el desarrollo de los acontecimientos le indujo a optar por suspender la potestad real y abandonar el país. No pensó en resistir con ayuda de la fuerza, tal como le proponían. En esta ocasión, igual que en otras, el monarca mostró más sentido común que algunos de sus colaboradores.

La caída de la Monarquía no tenía por qué haber sido inevitable, pues no había sido menos regeneracionista que otros sectores de la sociedad española, pero la realidad es que esta última, prescindió de las instituciones monárquicas como si fueran un estorbo para su modernización.

La cuestión de Marruecos.

La política africanista emprendida por España a principios de siglo quedaba encuadrada en tres coordenadas: el peso del 98, la tradición histórica española en el norte de África y la rivalidad colonial anglo-francesa. La depresión moral provocada por el desastre ultramarino había provocado dos tendencias divergentes: por un lado, una corriente anticolonialista y antimilitarista sostenida desde frentes marginales al sistema político de la Restauración -los partidos republicanos y obreros- e impulsada desde el regeneracionismo de Costa; por otro, el empeño, también "regeneracionista", de volver a introducir a España en el círculo de las potencias europeas, en un momento en que el mayor o menor prestigio de las naciones era calibrado en función de su poder colonial. Además, en el juego de la alta política internacional de bloques y de alianzas, las viejas potencias en trance de agotamiento corrían un riesgo evidente que radicaba en pasar de ser "sujetos" a convertirse en "objetos" de los grandes estados industrializados.

La política africanista española.

En el siglo XIX, España participó en acciones bélicas en África: la "guerra de África" de 1859-1860 giró en torno a Ceuta, con el general Prim como principal protagonista, y la de 1893, en torno a Melilla y acabó en un tratado hispano-marroquí firmado en Sevilla en 1894.

Cuando el colonialismo francés se fijó en Marruecos, para redondear su dominio sobre Túnez y Argelia, no pudo dejar de tener en cuenta la realidad histórica de que España estaba asentada en Ceuta y Melilla. A su vez, otras potencias, como Inglaterra o Alemania, entraron en juego para evitar el dominio francés del Mediterráneo desde las costas de África. A Francia, teniendo en frente a estos dos estados, le interesaba mantener buenas relaciones con España y llegar solamente con ella a un "reparto marroquí". Y para ello colaboró eficazmente en el tratado que regulaba las fronteras del enclave español en el golfo de Guinea (Guinea española) y del territorio sahariano de Río de Oro (más tarde, Sahara español).

Es cierto que España necesitaba, por un lado, asegurar sus plazas de Ceuta y Melilla, y para ello debía prolongar su dominio tierra adentro, pero, por otro, era consciente de que la aventura conllevaría muchos gastos y riesgos de vidas humanas, habida cuenta de la experiencia que se acababa de vivir en las Antillas y en el Pacífico. Con todo, la tesis intervencionista siempre apoyó la idea de que si España abandonaba Marruecos y si cualquier otra nación se asentaba en el norte de África, la Península sería totalmente vulnerable.

Fueron, por tanto, la presencia francesa y la amenaza de participación de Alemania, y no la idea de misión histórica en África, las que llevaron a España a las

campañas de Marruecos en las siguientes décadas.

Escribe el historiador Jover que, al final, España optó, "a regañadientes" y por necesidad, con una opinión pública mayoritariamente en contra, por embarcarse en la aventura de Marruecos para renovar su prestigio frente a los que en Europa la consideraban una nación moribunda. Con todo, habría que añadir, y al margen de esta visión exclusivamente política, que estaban por medio muchos intereses económicos, entre los cuales la minería y la construcción de ferrocarriles eran los incentivos más poderosos para la oligarquía financiera de la Restauración, que deseaba resarcirse de las pérdidas coloniales. En efecto, en el norte de Marruecos el capitalismo financiero español había obtenido la explotación de un mineral de hierro de una ley muy estimable, que fue dedicado -por la situación geográfica de las minas, por seguir con el tradicional modo del capitalismo peninsular de incrementar los beneficios, consistente en limitarse a exportar mineral de hierro en bruto, y por la creciente demanda de los estados europeos industrializados- a ser exportado prácticamente en su totalidad.

Desde 1904 la penetración española en Marruecos había sido "pacífica", sustentada en pactos individuales con las cabilas. Esta fracasó en 1909 y, a partir de entonces, se entró casi por obligación en lo que en los círculos diplomáticos europeos se denominaba "avispero" marroquí. Lo que en ese año se llamó "guerra de Melilla" -y que provocó la "Semana Trágica" de Barcelona- no fue más que la respuesta militar del Gobierno para proteger los intereses económicos españoles ante los ataques de las cabilas insumisas.

El desastre de Annual.

La guerra llegó en 1921 y con ella el desastre de Annual. Fue el resultado trágico de un esfuerzo por establecer un protectorado que había venido incidiendo negativamente en la economía, en la sociedad y en la política desde 1904.

La Gran Guerra de 1914-1918 había supuesto para España un forzoso paréntesis en su acción en Marruecos por la misma neutralidad que se había impuesto; pero en 1919, terminado el conflicto, Francia intensificó su acción, apuntando la amenaza de instalarse en toda la región sin respetar sus pactos anteriores con España. En respuesta a esto, y también en 1919, el gobierno español inició una especie de carrera de toma de posiciones desde las bases de Ceuta y Melilla.

También entre los marroquíes repercutió el fin de la Gran Guerra porque apareció un nacionalismo revolucionario que se iba a enfrentar simultáneamente con la autoridad "oficial" del sultán y con la administración española.

El general Dámaso Berenguer, alto comisario de España en Marruecos, fue el encargado de ocupar la zona occidental, y al general Fernández Silvestre, inclinado a tomar iniciativas por cuenta propia y más antiguo en el escalafón que Berenguer, se le confiaron las operaciones de la zona oriental.

Fue una guerra impopular en España, sin apoyo ministerial, con el único estímulo que el Rey, jefe supremo del Ejército, otorgó a sus generales. Aunque no hubo una acción coordinada entre ambos generales, entre 1920 y 1921 se ocuparon importantes posiciones -Xauen, Annual, Sidi Idris, Abarrán...

Mientras, un caudillo rifeño, Abd-el-Krim, fue reuniendo tribus y cohesionando la resistencia rifeña, y finalmente desencadenaría la ofensiva desde Alhucemas sobre

Igueriben, que fue ocupada, y Annual.

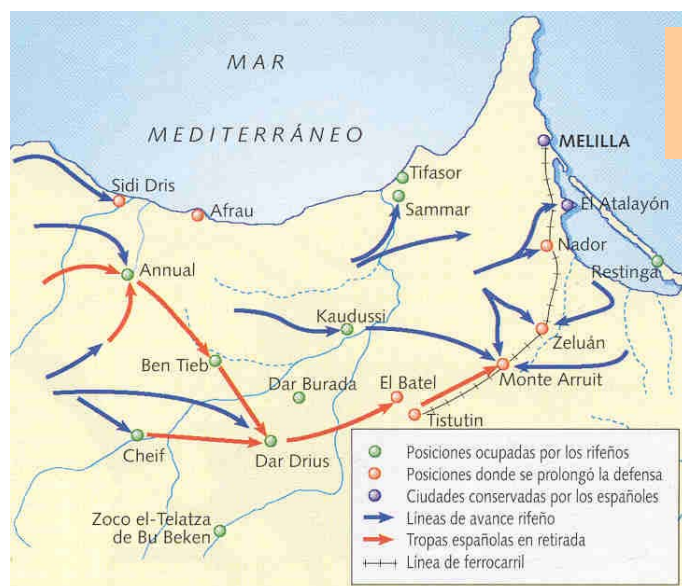
Sin la esperanza de refuerzos, el general Silvestre ordenó la retirada de esta plaza. Esta retirada se convirtió en una carnicería en la que murieron alrededor de 14.000 hombres (junio de 1921). A Silvestre le mataron o se suicidó en el parapeto de Annual.

Consecuencias de Annual.

Las consecuencias de Annual fueron dilatadas y profundas. Y, apenas restablecida la iniciativa española en Melilla, se planteó una doble ofensiva política, que se convirtió en bandera del socialismo, contra los mandos del Ejército vencido -y, en general, contra toda la administración de las fuerzas que actuaban en África- y contra el propio Rey. En este último caso se especulaba sobre determinados mensajes de aliento que habría enviado Alfonso XIII a Silvestre incitándole a actuar en contra de lo convenido con Berenguer.

En el mismo mes de agosto de 1921 se designó al general Picasso para que abriera un expediente gubernativo sobre las responsabilidades de los mandos en la derrota de Annual. No arrojó demasiada luz y sí parece dejar constancia de que la acción de Silvestre sobre Alhucemas contó con la aquiescencia del Gobierno y con el asentimiento del general Berenguer.

Importante consecuencia de la guerra y de Annual fue el descrédito final de la Juntas Militares de Defensa. Si a su comienzo habían contado con la simpatía popular, en los años siguientes la fueron perdiendo cuando empezó a comprobarse que el movimiento era uno más para controlar los mandos y adquirir prebendas. Precisamente, a esto atribuía ahora la opinión pública la degradación del espíritu de la oficialidad combatiente y la disminución de las inversiones en material. Por eso, la crudeza de las operaciones del Rif y el sacrificio de los soldados que allí luchaban y morían se volvieron en contra de los egoísmos de las Juntas de Defensa, que desaparecieron en 1922.



Mapa con el desarrollo de la batalla de Annual.

Texto extraído del libro de texto de Historia de España de 2º de bachillerato de editorial Anaya. Edición de 2001.